

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Ref. 11001 4003 019 2018 00565 00

I. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho a proferir sentencia dentro del proceso ejecutivo singular promovido por MARTHA NOHORA ÁVILA DE BERMUDEZ contra JAIME ALEXIS BEJARANO ALEGRÍA y ADRIANA PATRICIA BUITRAGO MÉNDEZ.

II. ANTECEDENTES

Pretensión

MARTHA NOHORA ÁVILA DE BERMUDEZ instauró demanda ejecutiva singular de mínima cuantía contra JAIME ALEXIS BEJARANO ALEGRÍA y ADRIANA PATRICIA BUITRAGO MÉNDEZ, con el fin de obtener el pago de la suma de \$16.497.435 m./cte contenida en la letra de cambio No.2115104761, junto con los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera, a partir del 3 de enero de 2018 hasta que se verifique el pago total de lo adeudado, y por los intereses moratorios causados con anterioridad sobre la suma de \$20.497.435 m./cte desde que la obligación se hizo exigible, esto es, 5 de julio de 2017 hasta el 2 de enero de 2018. (fl. 10 a 14, c.1).

Fundamentos fácticos

Para fundamentar sus pretensiones la parte actora adujo, en síntesis, que:

1. Con ocasión a un contrato de compraventa de un bien inmueble, los demandados suscribieron la letra de cambio No. 5104761 por valor de \$20.497.435, con fecha de vencimiento 5 de julio de 2017, la cual fue presentada para su cobro.

2. No obstante, los deudores manifestaron no tener dinero, con posterioridad ante la insistencia reiterada para la cancelación del título el 2 de enero de 2018 consignaron la suma de \$4.000.000 m./cte quedando un saldo pendiente de \$16.497.435 sin que hubiesen sido cancelados.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

1) Mediante auto adiado 10 de julio de 2018 se libró mandamiento de pago a favor de la señora MARTHA NOHORA ÁVILA y en contra de los demandados por las sumas solicitadas (fl.17 c.1).

2) Los demandados Jaime Alexis Bejarano Alegría y Adriana Patricia Buitrago Méndez se notificaron en debida forma, a través de curador ad litem, según el acta vista a folio 52 de la presente encuadernación, quien dentro del término legal se opuso a las pretensiones del libelo formulando como excepciones las denominadas *“prescripción de la acción cambiaria”* y *“Genérica”*. La primera sustentada en que la prescripción no se interrumpió con la presentación de la demanda, teniendo en cuenta que en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso transcurrió más de un (1) año entre el 14 de julio de 2018, día siguiente a la fecha en que se notificó por estado el auto de mandamiento ejecutivo, y el 19 de abril de 2021, data en que se surtió la notificación del extremo pasivo; por tanto, se configuró el fenómeno en comento, pues el título base de la ejecución tiene como fecha de vencimiento el 5 de julio de 2017 y por ende el término de tres años de que trata el artículo 789 del Código de Comercio, vencía el 5 de julio de 2020.

3) De las excepciones propuestas se corrió traslado a la parte actora quien dentro del término legal concedido guardó silencio.

IV. PROBLEMA JURÍDICO

Observa el despacho que el problema jurídico en el presente asunto, radica en determinar si la excepción planteada por la parte ejecutada tiene la virtualidad de enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado.

V. CONSIDERACIONES

1. Cumple precisar que se reúnen a cabalidad los denominados presupuestos procesales necesarios para la normal configuración y trámite del litigio, a saber, la capacidad de las partes, demanda en forma y competencia del Juzgado, obran en el expediente y no se observa causal de nulidad alguna que conlleve a invalidar lo actuado en todo, o en parte, pues se advierte que los diferentes actos procesales se adelantaron con arreglo a las normas que los gobiernan.

La acción promovida por la señora Martha Nohora Ávila de Bermúdez es la EJECUTIVA SINGULAR, consagrada artículo 422 y subsiguientes del Código General del Proceso, cuya finalidad jurídica se orienta a obtener el cumplimiento de una prestación contenida en un documento que provenga del deudor o su causante y que emerja de manera clara, expresa y exigible, para lo cual es necesario que quien la promueve aporte con el libelo introductor un instrumento que cumpla con tales características.

En ese sentido, en cuanto al primer requisito para que un documento pueda ser considerado título ejecutivo, es decir, la **claridad**, implica que la obligación en él contenida se encuentre estructurada de forma lógica, racional y precisa, de manera que, exista plena certeza respecto del objeto de la prestación y de los individuos intervinientes, la persona que se encuentra obligada a cumplir, así como, aquel en favor de quien se ejecutará la misma.

Frente al presupuesto de **expresividad**, éste consiste en que el contenido del documento debe ser entendible sin que haya lugar realizar una interpretación más allá de la información plasmada en el cuerpo del título basándose en suposiciones o presunciones que den cuenta de la existencia o condiciones de la obligación y finalmente, **la exigibilidad** determina que la obligación pueda ser cobrada por cuanto debe incorporar la forma de vencimiento estando ligada íntimamente al plazo y la condición.

En tal sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el estudio de una acción constitucional, con relación a este tópico precisó:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”¹ (énfasis del despacho).

¹ CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria STC3298-2019, M.P. Luis Armando Tolosa

2. En aras de satisfacer tal exigencia, el extremo demandante aportó con el libelo introductor la letra de cambio No. 211510476, suscrita por los señores Jaime Alexis Bejarano Alegría y Adriana Patricia Buitrago Méndez mediante la cual se obligaron a cancelar a la orden de Martha Nohora Ávila de Bermúdez, la suma de \$20.497.435 m./cte evidenciándose como fecha de vencimiento el día 5 de julio de 2017. Documento, que cumple a cabalidad con las exigencias previstas en el Art. 621 del Código de Comercio para todo título valor y las especiales consagradas en el artículo 671 ibídem, pues contiene la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, se señala de forma expresa quien es el acreedor y los obligados cambiarios, amen que acredita la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del demandado y a favor de la ejecutante, es decir, reúnen los requisitos del artículo 422 del C. G. del P.

3. EXCEPCIONES DE MERITO:

El ejecutado, dentro de la oportunidad consagrada por la ley, puede proponer defensas y excepciones y solicitar las pruebas que la respalden. Facultad debidamente ejercida en el sub-lite, en el que la parte demandada, a través de curador *Ad-litem*, controvirtió el proveído intimidatorio con las denominadas: “*prescripción de la acción cambiaria*” y “*la genérica*”, de las cuales se realizara su estudio teniendo en cuenta las pruebas y fundamentos aportados para su apoyo.

3.1. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA.

3.1.1. Frente a tal excepción, es de advertirse que el fenómeno de la prescripción puede acogerse a través de dos conceptos diferentes, de un lado como un modo adquirir el dominio de las cosas pues en virtud de la posesión por un período determinado y con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, se obtiene el derecho real de los bienes ajenos corporales, raíces o muebles que se encuentran en el comercio humano, de otro lado, como una forma de extinguir las acciones y derechos personales, cuando éstos no se han ejercido en un lapso considerable determinado por el legislador, denominándose **prescripción extintiva o liberatoria** sin que ello implique que se encuentre en discusión la titularidad de las cosas. De manera que para que sea aplicable la figura en comento se requiere **i)** El transcurso del tiempo, **ii)** inactividad del acreedor, **iii)** alegarse expresamente, pues no opera de oficio sino a solicitud de parte **iv)** que no se haya renunciado, suspendido o interrumpido el término de prescripción, sobre el particular la Corporación en cita ha señalado que:

“La prescripción liberatoria o extintiva de derechos personales es un modo de extinguir los derechos y las acciones a consecuencia del transcurso de un lapso predeterminado en la ley, sin que el titular de esos derechos y acciones los haya ejercido. Su consolidación se supedita a que la acción sea prescriptible, que es la regla general, a que transcurra el tiempo legalmente establecido teniendo en consideración la interrupción y suspensión de

que puede ser objeto; y a que el titular del derecho de acción se abstenga en ese tiempo de ejercer el derecho en la forma legalmente prevenida.

La prescripción extintiva puede ser de largo o corto tiempo, y sobreviene con el cumplimiento de los requisitos mencionados, pero al paso que la primera exige el transcurso de diez años (en el caso de la ordinaria y cinco en la ejecutiva la segunda)”²

Bajo esta perspectiva en punto de la materialización de la prescripción es menester que concurren tres sujetos pues se itera no opera de pleno derecho siendo menester alegarla en el transcurso del proceso. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia 091 de 2018 precisó:

“La prescripción extintiva ante la Jurisdicción Ordinaria requiere, para su configuración, la participación de tres sujetos: el acreedor o titular del derecho que no exigió su cumplimiento o ejecución a tiempo, el deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica que alegó la ocurrencia de la prescripción como excepción y así se opuso a su realización y el juez que la declaró en la sentencia. La falta de la participación de cualquiera de los tres sujetos, impide la configuración de la prescripción.”

3.1.2 Ahora como se expresó en líneas precedentes, el término prescriptivo es susceptible de interrupción o renuncia, eventos en los cuales el lapso que había comenzado a transcurrir se suprime y la misma no puede consumarse debiendo iniciarse un nuevo periodo, es decir se revive nuevamente la acción cambiaria en cabeza del acreedor. Una de las formas de borrar el término prescriptivo que ha corrido y, por consiguiente, revivir el derecho de acción que le asiste al acreedor, es la **interrupción** que puede ser de manera civil o naturalmente al tenor de lo dispuesto en el artículo 2539 del Código Civil acaeciendo lo primero, cuando se presenta la demanda instaurada por el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación, y lo segundo, en el evento en que el deudor reconoce ya sea expresa o tácitamente la obligación a su cargo bien porque la confiesa o hace abonos, paga intereses etc.³

No obstante lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso para que la presentación de la demanda posea la virtualidad de interrumpir el término de prescripción, se debe realizar la intimación al demandado dentro del lapso de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación del auto admisorio al demandante o el mandamiento de pago al ejecutante, siendo así, siendo así, en los términos del artículo 789 del Código de Comercio la acción cambiaria que se deriva del título valor letra de cambio prescribe en el término de tres (3) años contados a partir del día de vencimiento.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil SC6575-2015 M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz.

³ *Ibidem*.

Sin embargo, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consuma con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda” (subrayas y negrillas fuera de texto) (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág. 132; 2318, pág. 120)”

“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual” (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil – STC14529-2018 Radicación n. 11001-02-03-000-2018-02989-00 del 7 de noviembre de 2018 M.P Ariel Salazar Ramírez).

De ahí que, la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia⁴.

3.1.3. Conforme a las anteriores precisiones, debe entrar el Despacho a determinar si en efecto operó el medio exceptivo propuesto, para lo cual, en principio, ha de tenerse en cuenta la fecha de exigibilidad del título aportado como base de recaudo, la data en que se interpuso la demanda y la fecha en que se notificó el mandamiento de pago al extremo ejecutado.

⁴ Sentencia de Casación SC5755-2014, dictada el 9 de mayo de 2014 dentro del radicado 11001-31-10-013-1990-00659-01 2 Folios 8 a 9 cuaderno principal

Bajo esta perspectiva, descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que la letra de cambio No. 211510476 por valor de \$20.497.435 m./cte, suscrita por los aquí demandados tiene como fecha de exigibilidad el día cinco (5) de julio de 2017, de manera que, en principio, a partir de dicha data empezó a contabilizarse el lapso de prescripción, no obstante, teniendo en cuenta lo manifestado por la parte actora en el hecho quinto del escrito de demanda: *“ante la insistencia reiterada para la cancelación del título valor mencionado, procedieron a consignar el 2 de enero de 2018, ante el Banco Agrario oficina de depósitos judiciales la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 4.000.000 .Mcte)”*, hubo una interrupción debido a que los deudores efectuaron un pago parcial reconociendo de forma tácita la obligación, por tanto, el término prescriptivo se reinició a partir de ese momento, en consecuencia la fecha que se debe tomar para efectos del estudio que acá emprendido es el **2 de enero de 2018**, siendo así, el periodo de tres años de que trata el artículo 789 en cita, se cumplía el **2 de enero de 2021**.

De otro lado revisado el informativo se evidencia que la demanda fue presentada a reparto el 22 de mayo de 2018 (f. 15), es decir, con la presentación del libelo introductor, teóricamente se interrumpió el término de prescripción previsto en el estatuto mercantil siendo menester determinar el momento en que se integró el contradictorio.

Entonces, del expediente se desprende que el mandamiento de pago se notificó por estado a la parte actora el 13 de julio de 2018 (fl 17 vuelto c.1) lo que implica, que ésta contaba hasta el 14 de julio de 2019 para enterar a los demandados acerca del contenido de la orden de apremio librada, a fin de lograr la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, circunstancia que solo se perfeccionó hasta el 19 de abril de 2021 a través de curador ad litem (fl 52, ib), lo que de suyo permite colegir que para la fecha de notificación a los demandados, las obligaciones derivadas del título báculo de la acción, en principio ya se encontraban afectadas por el fenómeno de la prescripción, de no ser porque existen plazos que deben descontarse del mentado lapso.

En efecto, la tardanza en el enteramiento del ejecutado, observa el Despacho no se debió a la incuria o negligencia de la ejecutante, sino a tardanzas atribuibles a la administración de justicia, pues posteriormente y luego de intentar la notificación personal de los demandados con resultados negativos, mediante memorial radicado el 10 de junio de 2019 (fl. 24), solicitó su emplazamiento de conformidad con el artículo 318 del C.P.C., vigente para ese momento, ante lo cual esta sede judicial en proveído del 25 siguiente (fl. 26), dispuso el emplazamiento de la parte ejecutada, aportándose las publicaciones correspondientes el 17 de octubre de ese mismo año (fls. 27 a 29), y finalmente en auto adiado 3 de diciembre de 2019 se procedió a designarles Curador Ad

Litem para que concurriera a notificarse de la orden de pago y los representara en el proceso. (fl. 31)

Adviértase que desde que se designó Curador Ad litem hasta el momento en que se notificó la auxiliar de la justicia Jorge Andrés Valencia Cortes (19 de abril de 2021), transcurrió, alrededor de un (1) año y cuatro (4) meses, como quiera que los que eran designados no concurrieron a tomar posesión o se excusaban para no aceptar el mismo y tal como se desprende del plenario.

Por tanto, es posible concluir que efectivamente la parte demandante asumió las cargas procesales que le eran propias, pues antes de que venciera el término consagrado por el legislador para impedir que operara la prescripción (2 de enero de 2021), procuró no solo la notificación de los deudores, sino que ante el resultado negativo de la misma pidió el emplazamiento de los ejecutados y la designación de un curador ad litem, razón por la cual y teniendo en cuenta que en el presente caso se dan los presupuestos exigidos del precedente jurisprudencial antes citado, impide que la excepción de prescripción pueda prosperar.

3.2. EXCEPCIÓN GENÉRICA:

3.2.1. Solicita el defensor en este medio de defensa, que el Despacho de manera oficiosa declare probada cualquier excepción de mérito, cuyos hechos sustentatorios aparezcan demostrados en el curso del proceso y se destaquen.

Dispone el artículo 282 del Código General del Proceso que:

“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

La excepción a este deber del juez de declarar las excepciones “genéricas”, la constituye precisamente el proceso ejecutivo, punto frente al cual ha señalado la jurisprudencia:

“En su oportunidad, el curador ad-litem presentó como excepción la denominada genérica, esto es la que resulte probada dentro del proceso. Al respecto debe señalarse que este tipo de excepción, es decir, la denominada “genérica”, no es de recibo en los procesos ejecutivos, toda vez que según el artículo 509 inciso 1º del C. de P. C., cuando se proponen excepciones de mérito en éste (sic) tipo de procesos, se debe indicar los hechos en que se funda la misma, y como quiera que en la genérica no se esbozan los presupuestos en que se estructura la excepción, la misma no es procedente entratándose de procesos ejecutivos....”

(Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia del 29 de mayo de 1998, Magistrada Ponente, Nohora Elisa del Río Mantilla).

Esta jurisprudencia, compartida por este Despacho, expone los motivos por los cuales no es procedente declarar probada de oficio ninguna excepción, menos aun cuando “*la genérica*”, no constituye un verdadero medio exceptivo fundado en algún hecho impeditivo o extintivo capaz de derribar o aniquilar las pretensiones de la parte actora, situación suficiente para denegar la excepción, habida cuenta que carece de hechos de la naturaleza indicada, pues solo se solicita que se declare, pero no se especifica el aspecto sobre el cual se basa, además de ello revisado el plenario el Despacho no observa hechos que puedan constituir una excepción de las que el juez pueda declarar de oficio.

4. Los anteriores razonamientos se consideran suficientes para declarar infundadas las excepciones de mérito analizadas y, en consecuencia, se ha de ordenar seguir adelante con la ejecución, en la forma dispuesta en el mandamiento de pago.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VII. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR infundada la excepción de mérito planteada por el extremo demandado, por las razones consignadas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante la ejecución conforme el mandamiento de pago librado.

TERCERO: Decretar la venta en pública subasta los bienes embargados al demandado y los que posteriormente se llegaren a embargar.

CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito conforme lo normado en el artículo 446 del C. G. del P.

QUINTO: Condenar en costas de esta instancia a la parte demandada y a favor de la parte ejecutante. Para lo cual téngase como agencias en derecho la suma de \$1.154.820,45 Liquidense.

Notifíquese y cúmplase,⁵

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

**IRIS MILDRED GUTIERREZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **356defab75beca3e7530e62f912a7e21c0050fdeaf1a97aebeeb2d60dce096c0**
Documento generado en 29/06/2021 03:06:55 PM

⁵ Este proveído se notificó por estado No. 70 de 30 de junio de 2021.